

El Congreso Justicialista Argentino en la Prolongación de la Crisis

(Servicio Especial de Inter Press Service)

por Carlos MOLINA

BUENOS AIRES, agosto (IPS).—Las discrepancias en los más altos niveles de las fuerzas armadas, que tomaron estado público a partir de la designación del coronel Vicente Damasco como ministro del Interior, y las hondas fisuras que presenta el Partido Justicialista (PJ), de gobierno, son los más serios obstáculos que hoy impiden la concertación de un acuerdo político con respaldo militar que conduzca al país hacia las elecciones de 1977 y de las bases para el lanzamiento de las medidas económicas que está elaborando el nuevo equipo del área conducido por Antonio Cafiero, el cuarto ministro de Economía en los tres últimos meses.

Una dificultad más, y no pequeña, es la configurada por la actividad insurgente, que en estos días está alcanzando picos inusuales.

Las fuerzas armadas, luego de la frustrada experiencia de gobierno militar del periodo 1966-1973, habían retornado a una concepción de prescindencia profesionalista que cobró su mejor expresión en la persona del general Leandro Anaya, comandante general del ejército hasta hace tres meses. En base a esa tesis, las armas se unían en torno a sus actividades profesionales y apoyaban el proceso de institucionalización, prescindiendo de toda intervención política.

Al ser designado el actual comandante del ejército, general Alberto Numa Laplane, este imprimió un sesgo a la tesis que no significó modificaciones de fondo pero sí una mayor aproximación al poder político, definida como "profesionalismo integrado". En ese cuadro, se produjo la caída de José López Rega y la ofensiva de los sectores institucionalistas del oficialismo y la oposición, con una fuerte gravitación del sindicalismo encarnado por tres figuras: Lorenzo Miguel, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de las 62 organizaciones gremiales peronistas; Victorio Calabró, tesoro de la UOM y gobernador de la provin-

cia de Buenos Aires (la más importante del país, y Casildo Herreras, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La resistencia que desde sucesivas trincheras presentó el equipo de López Rega produjo un penoso arrastre de la crisis, cuyas alternativas los militares contemplaron con atención pero sin tomar intervención directa. Así es como se fueron sucediendo varios gabinetes, el deterioro económico creció y las tensiones sociales se agravaron al incrementarse el desempleo.

En las vísperas de la última renovación del gabinete, había consenso unánime de que sería la última, pues se partía de la seguridad de que Angel Federico Robledo, sobre quien convergen coincidentes simpatías del *establishment* institucionalizador, sería el virtual jefe de ese nuevo elenco. De ahí la sorpresa con que, el lunes 11, se recibió la noticia de que Tal rol había sido conferido a Damasco, en tanto Robledo quedaba a cargo de la cancillería. El encumbramiento de Damasco, militar en actividad, melló seriamente la unidad profesionalista tan arduamente mantenida por las armas. De inmediato, diez generales se enfrentaron en una votación precariamente resuelta a favor de Damasco por el comandante Laplane, y los comandantes de Aeronáutica y Marina, Héctor Fautario y Emilio Massera, iniciaron movimientos que dejaron huellas de su cuestionamiento a Damasco. En todos los casos, la razón invocada habría sido la de que la presencia de un militar en actividad en la cartera política comprometía la prescindencia de las fuerzas armadas, pero algunos medios informativos vieron diferencias más profundas.

En su mayoría, la oposición política se ha mantenido a prudente distancia de Damasco, en tanto Robledo pasó a ser, a pesar de su función de canciller, el centro de reuniones y consultas que no por desmentidas han perdido vigencia, y aquél procuraba ampliar su espacio político al visitar

el Congreso y reunir a los gobernadores.

Es imposible dar toda la secuencia de los contactos registrados en los últimos días, pero conviene rescatar, para fijar un eje direccional, la entrevista de Robledo con Fautario y Massera y el posterior viaje del canciller a Mar del Plata para visitar a la presidente Isabel Martínez, que horas antes había recibido a Damasco una entrevista realizada ayer entre éste y Laplane, otra (también ayer) de Miguel y Herreras con Robledo, la vitalidad de las discrepancias militares y la subsistencia de los cuestionamientos por el episodio del cheque por 31 millones de pesos que, por error, la presidente depositó en la cuenta de la sucesión del general Perón, cuando debía ir a la de la Cruzada de Solidaridad Justicialista, entidad benéfica presidida por la jefa del Estado.

Con el regreso de la presidente para la apertura del Congreso del PJ, se llega al segundo carril de la crisis: las grietas del partido oficial entre verticalistas y antiverticalistas. Los primeros que nuclean al llamado "neolopezreguismo", que predicán el acatamiento incondicional a la señora Martínez, sostienen que debe ser ésta quien designe a las nuevas autoridades partidarias. Los segundos sostienen que el Congreso debe manejarse con autonomía, siguiendo en esto a Calabró. Y un tercer sector, que respondería a Miguel, propiciaría la formación de una junta reorganizadora provisoria. Con este temperamento podrían coincidir los congresales orientados por los gobernadores excepto, por supuesto, los que siguen a Calabró, en tanto que un cuarto sector, tenido por algunos sectores como "camporista" y que acaudilla Jorge Llampart, ex dirigente de la Juventud Peronista, está más cerca de Calabró, pero pidiendo amnistía para los expulsados y elecciones internas, precisamente, uno de los expulsados es el ex presidente de la Nación Héctor Cámpora, cuyo regreso desde México se anuncia para fin de mes.

Como se ve, no son pocos los problemas a resolver, sobre todo si se les suma el incremento de la violencia, que ha alcanzado su climax con los cruentos episodios de Córdoba y el atentado contra un moderno destructor de la Armada.